

Resolución de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La extensión de la enfermedad provocada por el coronavirus Covid-19, su facilidad de contagio, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad, que aconsejan evitar cualquier concentración de personas, hace necesario que se extremen medidas excepcionales en centros y establecimientos en que se produzca afluencia y movimiento importante de personas por existir un mayor riesgo de exposición y transmisión del virus.

2. Los servicios sociales valencianos deben atender a una población considerada de alto riesgo en el caso de contagio del coronavirus Covid-19, por lo que resulta indispensable movilizar recursos materiales y humanos extraordinarios para prevenir y, en su caso, combatir la enfermedad con las máximas garantías en la preservación de la salud y el bienestar de los más vulnerables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 delega, en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo cuarto, en el Ministro de Sanidad las competencias en servicios sociales y, en su apartado tercero, le habilita a dictar las ordenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios y extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

2. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, por su parte, establece en el apartado primero del artículo 54 que, “sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley” y en su apartado segundo que, “en particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:

- a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- b) La intervención de medios materiales o personales.

c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

d) La suspensión del ejercicio de actividades.

e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta Ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta Ley”.

En el apartado tercero de dicho precepto se establece que: “las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable”.

3. La Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales, de conformidad con el artículo 49.1.49ª del Estatuto de Autonomía.

4. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana establece en el apartado tercero del artículo quinto que el sistema público valenciano de servicios sociales tiene carácter de servicio público esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía, según lo que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución Española.

Valorada la actual situación, teniendo en cuenta la actual situación de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y la necesidad de continuar prestando ciertos servicios del ámbito social y socio-sanitario, se procede a adoptar medidas preventivas para asegurar dicha prestación.

En consecuencia,

RESUELVO

Establecer las siguientes medidas especiales, en plena coordinación con el Ministerio de Sanidad:

La puesta a disposición de esta Administración de los medios y recursos de los servicios sociales o socio-sanitarios de otras administraciones públicas y entidades privadas. Esto se realizará de forma gradual según las necesidades sociales poniéndose a disposición los centros, establecimientos, servicios y programas de atención social o socio-sanitaria, así como su personal,

con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente y con la oportuna comunicación al ministerio correspondiente.

Disponibilidad de todo el personal funcionalmente dependiente de estos servicios cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídico para realizar funciones diferentes a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, relacionadas con la atención social o socio-sanitaria, directa o indirecta, de acuerdo con su perfil profesional, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 32/2020, de 13 de marzo, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19) respecto de la prioridad de la conselleria competente en sanidad universal y salud pública sobre todo el personal sanitario.

Así mismo, podrán adoptarse medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana y suspensión de la normativa relativa a jornadas de trabajo y descanso que se aplique a cada tipo de personal previa comunicación a los órganos de representación del personal y respetando los descansos establecidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en el Decreto 32/2020, de 13 de marzo, del Consell, siempre con carácter gradual y con utilización racional de los recursos humanos disponibles. En todo caso, la movilidad geográfica o funcional no podrá afectar a las mujeres víctimas de violencia de género que tengan adaptado su puesto de trabajo por esta circunstancia. Tampoco será aplicable a mujeres embarazadas.

Esta medida es extensiva al personal que realice funciones de mantenimiento o de administración, y cualquier otra que contribuya al funcionamiento de la atención social y sociosanitaria o de dispositivos de prevención, control o seguimiento.

Por otra parte, podrá quedar suspendido el régimen ordinario de permisos, excedencias, licencias y vacaciones, así como las reducciones de jornada y el régimen de turnos.

Por su parte, el personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente, la autorización para desempeñar funciones de atención social y socio-sanitaria, sin que ello determine el cese de la dispensa ni del personal sustituto que pudiera existir.

A tales efectos se dictarán las instrucciones complementarias que se estimen necesarias por los órganos competentes para el desarrollo de esta resolución.

Se someterán a autorización, en su caso, o ratificación judicial, las medidas en concreto que se adopten.

Se advierte que la presente resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, computado en los términos ya indicados, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente.

Valencia, en la fecha indicada en la firma
LA VICEPRESIDENTA Y CONSELLERA
DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

Resolució de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió en els serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19.

ANTECEDENTS DE FET

1. L'extensió de la malaltia provocada pel coronavirus Covid-19, la seua facilitat de contagi, les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat que aconsellen evitar qualsevol concentració de persones, fa necessari que s'extremen mesures excepcionals en centres i establiments en els quals es produïska aflluència i moviment important de persones per existir un major risc d'exposició i transmissió del virus.

2. Els serveis socials valencians han d'atendre a una població considerada d'alt risc en el cas de contagi del coronavirus Covid-19, pel que resulta indispensable mobilitzar recursos materials i humans extraordinaris per previndre i, en el seu cas, combatre la malaltia amb les màximes garanties en la preservació de la salut i el benestar de les persones més vulnerables.

FONAMENTS DE DRET

1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 delega, en el paràgraf segon del apartat segon de l'article quart, en el Ministre de Sanitat les competències en serveis socials i, en el seu apartat tercer, l'habilita a dictar ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seua actuació, siguen necessàries per a garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris i extraordinaris, en ordre a la protecció de persones, béns i llocs, mitjançant l'adopció de qualsevol de les mesures previstes en l'article 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.

2. La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, per la seua part, estableix en l'apartat primer de l'article 54 que, «sense perjudi de les mesures previstes en la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, amb caràcter excepcional i quan així ho requerisquen motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'àmbit de les seues respectives competències, podran adoptar quantes mesures siguen necessàries per a assegurar el compliment de la Llei» i en l'apartat segon que, «en particular, sense perjudi del previst en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, l'autoritat competent podrà adoptar, mitjançant resolució motivada, les següents mesures:

- a) La immobilització i, si escau, el decomís de productes i substàncies.
- b) La intervenció de mitjans materials o personals.

c) El tancament preventiu de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries.

d) La suspensió de l'exercici d'activitats.

e) La determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, així com del funcionament de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries a què es refereixen esta Llei, amb la finalitat de corregir les deficiències detectades.

f) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat vigent si existeixen indicis racionals de risc per a la salut inclosa la suspensió d'actuacions d'acord amb el que s'estableix en el Títol II d'aquesta Llei.

En l'apartat tercer d'aquest precepte s'estableix que: "les mesures s'adoptaran prèvia audiència dels interessats, excepte en risc imminent i extraordinari per a la salut de la població i la seua duració no excedirà del temps exigít per la situació de risc que les va motivar. Les despeses derivades de l'adopció de mesures cautelars contemplades en el present article seran a càrrec de la persona o empresa responsable".

3. La Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, té competència exclusiva en matèria de serveis socials, de conformitat amb l'article 49.1.49a de l'Estatut d'Autonomia.

4. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana estableix en l'apartat tercer de l'article cinqué que el sistema públic valencià de serveis socials té caràcter de servei públic essencial, perquè d'este es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la ciutadania, segons el que es disposa en l'article 128.2 de la Constitució Espanyola.

Valorada l'actual situació, tenint en compte l'actual situació d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i la necessitat de continuar prestant certs serveis de l'àmbit social i socio sanitari, es procedeix a adoptar mesures preventives per a assegurar aquesta prestació.

En conseqüència,

RESOLC

Establir les següents mesures especials, en plena coordinació amb el Ministeri de Sanitat:

La posada a la disposició d'aquesta Administració dels mitjans i recursos dels serveis socials o socio sanitaris d'altres administracions públiques i entitats privades. Això es realitzarà de manera gradual segons les necessitats socials posant-se a disposició els centres, establiments, serveis i programes d'atenció social o socio sanitària, així com el seu personal, amb l'autorització judicial prèvia quan resulte pertinent i amb l'oportuna comunicació al ministeri corresponent.

Disponibilitat de tot el personal funcionalment dependent d'aquests serveis qualsevol que siga la seua naturalesa i règim jurídic per a realitzar funcions diferents de les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, relacionades amb l'atenció social o sociosanitària, directa o indirecta, d'acord amb el seu perfil professional, sense perjudici del que s'estableix en el Decret 32/2020, de 13 de març, del Consell, pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19) respecte de la prioritat de la conselleria competent en sanitat universal i salut pública sobretot el personal sanitari.

Així mateix, podran adoptar-se mesures de mobilitat geogràfica en el conjunt de la Comunitat Valenciana i suspensió de la normativa relativa a jornades de treball i descans que s'aplique a cada tipus de personal prèvia comunicació als òrgans de representació del personal i respectant els descansos establits per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el Decret 32/2020, de 13 de març, del Consell, sempre amb caràcter gradual i amb utilització racional dels recursos humans disponibles. En tot cas, la mobilitat geogràfica o funcional no podrà afectar les dones víctimes de violència de gènere que tinguen adaptat el seu lloc de treball per esta circumstància. Tampoc serà aplicable a dones embarassades.

Aquesta mesura és extensiva al personal que realitze funcions de manteniment o d'administració, i qualsevol altra que contribueisca al funcionament de l'atenció social i sociosanitària o de dispositius de prevenció, control o seguiment.

D'altra banda, podrà quedar suspés el règim ordinari de permisos, excedències, llicències i vacances, així com les reduccions de jornada i el règim de torns.

Per part seua, el personal amb dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercici de funcions sindicals podrà sol·licitar voluntàriament, l'autorització per a exercir funcions d'atenció social i sociosanitària, sense que això determine el cessament de la dispensa ni del personal substituït que poguera existir.

A tals efectes es dictaran les instruccions complementàries que s'estimen necessàries pels òrgans competents per al desenvolupament d'aquesta resolució.

Se sotmetran a autorització, en el seu cas, o ratificació judicial, les mesures en concret que s'adopten.

S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administratiu, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, computat en els termes ja indicats, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que pugui interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

València, en la data indicada en la signatura
LA VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES